

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Manuel Ramirez, contra la Gefatura política de Irapuato que lo juzgó como salteador, condenándolo a la pena de muerte.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Manuel Ramirez promovió el presente recurso de amparo contra el C. Gefe político de Irapuato, por haberlo juzgado y sentenciado como reo del delito de robo con asalto, condenándolo a la pena de muerte de la que fué indultado por la II. Legislatura del Estado, y actualmente está estinguendo en la Penitenciaría de Salamanca la de diez años de presidio en que fué conmutada la de muerte que se le impuso primeramente. Las garantías individuales que se invocan como violadas con estos procedimientos, son las consignadas en el artículo 20 de la Constitución federal.

El C. Gefe político de Irapuato, designado como autoridad ejecutora del acto reclamado, manifestó: que no podia rendir el informe de que habla el artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, por que Manuel Ramirez habia sido juzgado por su antecesor, y la causa que se habia instruido estaba en el Supremo Tribunal del Estado.

Recibido el juicio á prueba, se agregó á estas actuaciones el testimonio del acta instruida contra el quejoso, de cuyas constancias aparece: que el hecho que motivó el proceso, fué el robo con asalto cometido en el rancho llamado de la Soledad; y la ley segun la cual fué juzgado y sentenciado el quejoso, fué la de 18 de Mayo de 1871. Esta ley suspendió exclusivamente para los salteadores y plagiarios, entre otras garantías individuales, la que invoca el quejoso como base del presente recurso. De ma-

nera que para resolver si debe concederse el amparo de la Justicia de la Union que se solicita, debe examinarse si el quejoso debió ser considerado como comprendido en la ley citada, ó si en la época en que fué juzgado gozaba de las garantías individuales de que habla el artículo 20 de la Constitución federal.

El hecho que motivó la formación de dicha causa está probado plenamente; pero no está de la misma manera justificado que Manuel Ramirez haya concurrido á su comisión. Las pruebas que resultaron contra él, y que se hicieron valer en la sentencia pronunciada por la Gefatura política de Irapuato, consisten en presunciones que no forman una prueba plena.

La ley de 18 de Mayo de 1871 supone para su aplicación, la prueba plena de la existencia del delito y de la delincuencia del procesado; supuesto que la suspensión de garantías individuales á que se refiere, es exclusivamente para los salteadores y plagiarios, y en su artículo 3º terminantemente dice: que se impondrá á la pena probado el delito. No estando demostrado de una manera legal, que Manuel Ramirez debió ser comprendido en la ley citada; no está demostrado que en la época en que se le juzgó y sentenció, estuvieran suspensas para él las garantías individuales que ha invocado como violadas en su persona.

Por esta razon, el Promotor fiscal pide al Juzgado se sirva conceder el amparo de la Justicia de la Union que solicita Manuel Ramirez. Guanajuato, Junio 30 de 1873.
—José Aguilar y Córdova.

Sentencia del C. Juez de Distrito

Guanajuato, 12 de Julio de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Manuel Ramirez, contra el acta criminal que le instruyó el Gefe del partido de Irapuato, C. Joaquin Luna, condenándolo

á muerte como salteador, con violacion de las garantías que refiere el artículo 20 de la Constitucion, segun asegura el agraviado; resultando que por el robo con asalto que se intentó perpetrar en la Hacienda de la Soledad la noche del 11 de Julio de 1871, fué procesado el quejoso con arreglo á la ley de 18 de Mayo del mismo año; y se le impuso la pena capital, en vista de las pruebas que se acopiaron en las actuaciones respectivas.

Considerando: que estas pruebas no son suficientes para demostrar jurídicamente que el nominado Ramirez haya sido uno de los autores del delito que se le imputa, supuesto que ninguno de los testigos que fueron examinados declaró haberlo conocido entre los asaltantes; y todos los demas datos que sirvieron de fundamento á la sentencia de la autoridad política de Irapuato, no son sino presunciones que, en tela de juicio y mediante los recursos y fórmulas legales, podran esclarecerse con toda esactitud; pero que no han debido estimarse como una comprobacion plena de la culpabilidad del promovente.

Considerando: que la ley de 18 de Mayo de 1871, no suspendió sino esclusivamente para los salteadores y plagarios algunas de las garantías individuales del hombre; y en consecuencia no debe ser aplicada al quejoso, que no es ni plagario ni salteador.

Considerando: que en el proceso no se careó al presunto reo con todos los testigos, cuyos testimonios le fueron adversos, quebrantándose así el precepto de la fraccion 3ª del artículo constitucional citado; por estas consideraciones, de conformidad con el pelimento fiscal y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Juez de Distrito, declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Manuel Ramirez, contra los procedimientos del Gefe del Partido de Irapuato, C. Joaquín Luna, en virtud de los cuales fué juzgado y sentenciado á muerte el quejoso, como salteador, con violacion del artículo 20 de la Carta fundamental de

la República en su fraccion 3ª. Notifíquese este fallo á las partes, publíquese en el Periódico Oficial, y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos legales. Así el nominado C. Juez de Distrito lo decretó y firmó. Doy fé.—*Albino Torres.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 18 de Julio de 1873.—*Luis G. Medina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 25 de 1873.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Manuel Ramirez, contra la Gefatura política de Irapuato, que lo juzgó como salteador, condenandolo á la pena de muerte con arreglo á la ley de 9 de Abril de 1871, con cuyo procedimiento cree el quejoso que se han violado en su persona las garantías que otorga el artículo 20 de la Constitucion de la República.

Vistas la constancias de autos y apareciendo de ellas justificado el delito de que se acusa el peticionario, y que la autoridad contra quien se solicita el amparo, ha obrado en la orbita de sus atribuciones, sin que sus procedimientos importen violacion alguna de las garantías invocadas por Ramirez en su escrito de queja.

Por lo expuesto, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada en 12 de Julio del corriente año por el Juzgado de Distrito de Guanajuato concediendo el amparo, y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Manuel Ramirez, en las garantías á que se refiere el presente juicio.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, acompañandole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 11 de 1873.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por el C. Luis Rivas, contra el Tribunal Supremo del Estado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que ha examinado en todos sus puntos el juicio de amparo intentado por Don Luis Rivas, contra los procedimientos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado á quien niega la competencia para juzgarlo por sus actos oficiales en desempeño de la Prefectura política del Distrito; ha visto cuidadosamente tambien los informes rendidos por el Ministro en funciones de Juez de 1ª instancia, y tratando de no demorar por mas tiempo este asunto que bastante ha retenido en despachar á causa de enfermedades, que son constantes al Juzgado, pasa á manifestar: que encuentra, C. Juez, que la queja de Rivas no es fundada, puesto que como Prefecto del Distrito, su Juez natural es el que previamente determinó la Constitución política del Estado, es decir, el Tribunal de Justicia.

Ahora bien, que al obrar como dice lo

hizo, haya sido por Orden ó con aprobación del que entonces fungía como Gobernador y Comandante militar; segun dice tambien con facultades discrecionales; que el Estado se encontraba en sitio, y las demas razones que expone, serán acaso atendibles en la causa que se le sigue y por vía de defensa; pero repite el que habla, que á su vez es indeclinable la jurisdiccion del Tribunal que quiere desconocer.

Por lo demas C. Juez, y para no alargar este pedimento con inútiles repeticiones, y estando enteramente conforme con las razones y fundamentos legales del informe rendido por el Ministro en funciones de Juez de 1ª instancia que corre de la hoja 19 á la 24, en todo lo que á su oficio fuere conducente, el fiscal concluye pidiendo declare V, que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Don Luis Rivas, contra los actos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que lo juzga por faltas oficiales cometidas por aquel, en desempeño de la Prefectura política de este Distrito y á que el quejoso se refiere.

Mazatlan, 25 de Febrero de 1873.—*L. Gaona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito

Mazatlan, 7 de Abril de 1873.—Visto el juicio de amparo que Don Luis Rivas promueve contra la providencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que manda se le procese por las faltas que se dice cometió en tiempo que desempeñó la Prefectura de este Distrito, y cuya providencia está ejecutando el C. Ministro del mismo Supremo Tribunal, Lic. Cipriano Pina. Visto así mismo que el quejoso funda su ocurno en las fracciones 1ª y 3ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, por lo que pidió tambien la suspension de tal providencia á lo que se accedió previo informe de la autoridad ejecutora y audiencia del C. Fiscal. Vista igualmente la soli-